



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-010-2019-00746-01 (O2-23-029)
Accionante: HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS
Accionada: ASFALTOS & HORMIGÓN S.A.
Procedencia: JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 178
Asunto: INDEMNIZACIÓN MORATORIA

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-010-2019-00746-01 (O2-23-029), instaurado por HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS, en contra de la sociedad ASFALTOS & HORMIGÓN S.A., con el fin de resolver el recurso de apelación que fuera propuesto por el ente societario demandado contra la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 29 de noviembre de 2022 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad ASFALTOS & HORMIGÓN S.A., en punto a que se declare la existencia de una relación de trabajo vigente entre el 07 de enero de 2014 y el 29 de marzo de 2019, reclamando en consecuencia el reconocimiento y pago de las diferencias resultantes en materia de prestaciones sociales durante todo el tiempo que estuvo

vigente el nexo contractual, junto con la indemnización por despido sin justa causa, indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, sanción por el no pago de los intereses a las cesantías y la sanción por no consignación del auxilio de cesantías a un fondo.

En respaldo de sus aspiraciones señaló que inició a prestar sus servicios personales a favor de ASFALTOS & HORMIGÓN S.A. a partir del 07 de enero de 2014 y hasta el 29 de marzo de 2019, data en que la compañía accionada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa. Acotó que, desempeñó sus funciones de lunes a domingo en una jornada ordinaria de 8 horas, percibiendo como última remuneración mensual una suma igual a \$ 828.116.

Ulteriormente relató que, durante el vínculo contractual con el pretendido empleador, este omitió hacer el pago completo de las prestaciones sociales, a la par que, el 11 de abril de 2019 realizó una liquidación de prestaciones sociales deficitaria, por lo que considera le asiste derecho a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 10 de febrero de 2020 (doc.06, carp.01), y se notificó a la demandada por conducta concluyente en proveído del 227 de mayo de 2021 (doc.09, carp.01), misma que, al momento de dar respuesta al escrito incoativo planteó oposición a la prosperidad de las súplicas incoativas, aceptando como ciertos los hechos que hacen referencia a la existencia de la relación de trabajo, sus extremos temporales y el valor pagado por concepto de liquidación de prestaciones sociales; adujo no ser ciertos o no constarle los demás. En su defensa, propuso con el carácter de mérito las excepciones que nominó como inexistencia de causales para el reintegro de la señora Hilda Adiel Ruiz Granados, jornada cumple con los máximos legales y pago de los recargos, liquidación efectuada en debida forma y compensación (doc.08, carp.01)

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 29 de noviembre de 2022 (doc.17, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en la que condenó al empresario convidado a juicio a reconocer y pagar a la señora HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS las acreencias sociales y las indemnizaciones que a continuación se detallan: **a.** \$ 5.073.583 por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones; **b.** \$ 7.390.999 por la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; **c.** \$ 37.016.785 por sanción por falta de pago, del artículo 65 del C.S.T. a la fecha de la emisión de la presente sentencia que seguirá acumulando un día de salario; **d.** \$ 27.603,87 por cada

día de retardo, hasta que se haga el pago efectivo y total de la obligación; gravándolo en costas (minuto 32:31 a 51:30, doc.20, carp.01).

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado, luego de establecer la existencia de la relación de trabajo y sus extremos temporales, aseguró que al momento en que un trabajador asegura que el monto de su remuneración no responde a los presupuestos legales, tal manifestación constituye una negación indefinida. Ello así, le correspondía a la compañía convidada a juicio adosar al cartulario los elementos demostrativos que dieran cuenta de las sumas pagadas a la solicitante, carga probatoria que encontró incumplida por parte de ASFALOS & HORMIGÓN S.A., dispensando las condenas por concepto de diferencias resultantes en materia de vacaciones y prestaciones sociales.

En lo que concierne a la indemnización moratoria por el no pago de las acreencias sociales, luego de traer a colación el razonamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no encontró justificada la conducta asumida por la encartada para omitir el reconocimiento completo de las prestaciones sociales que se causaron durante la vigencia de la relación de trabajo, asentando que la admisión a un proceso de reorganización empresarial no es óbice para condenar a las sumas indemnizatorias. Ello así, al encontrar que el ente societario ASFALTOS & HORMIGÓN fue admitido al proceso de reorganización empresarial en fecha posterior a la terminación del contrato de trabajo de la promotora, asentó que no se presentaron argumentos razonables que mostraran la buena fe en su conducta, por lo que procedió a condenar a la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del CST y la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial de la sociedad ASFALTOS Y HORMIGÓN S.A. se mostró en desacuerdo con la decisión adoptada por el *a quo*, puntualmente en lo que concierne a la sanción moratoria del artículo 65 del CST y la sanción moratoria por no consignación de las cesantías a un fondo.

Con tal propósito, la opugnada acusa la sentencia de primer grado de encontrar demostrado sin estarlo, la mala fe que se le atribuyó a la conducta de su representada, insistiendo en la necesidad de revocar la indemnización moratoria a la que fue condenada su prohijada. En este sendero, destacó que las sanciones moratorias no proceden de manera automática, sino que, por el contrario, debe probarse que la conducta del empleador estuvo revestida de mala fe.

Recalcó que el dador de laborío actuó conforme a derecho y cumplió con las obligaciones laborales consagradas en la ley, pagando a su ex-trabajadora lo que creyó deber. Así, colige

que en el tracto procesal no se demostró con suficiencia la mala fe o la intención de defraudar los intereses de la gestora (minutos 52:00 a 55:20, doc.20, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido el 06 de febrero de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 20 siguiente, (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ejercieran su derecho a la presentación de las alegaciones de conclusión por escrito, de considerarlo del caso. Así, la poderhabiente judicial de la accionada aseguró que *“...de conformidad con el informe de cesantías pagadas, emitido por el prestador ARUS, en el año 2014, la sociedad depósito a favor de la señora Granados, los valores correspondientes a las cesantías en el fondo Porvenir, por un valor de Seiscientos ochenta y ocho mil setenta y ocho pesos (\$ 688.078), pagados el 13 de febrero de 2015”*; aportando los documentos que dan cuenta del pago de cesantías de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y de la base para cálculo de liquidación arrojado por el sistema de nómina, de los que solicita, se dé traslado a la parte demandante. Ello así, asentó la ausencia de *“razón jurídica o fáctica para que se imponga condena a mi representada por concepto de la citada sanción, en la medida que como se ha probado, se cumplió con el pago de todas las acreencias”* (doc.04, carp.02).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por pasiva, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada; desestimándose, por tanto, las peticiones o hechos nuevos que no son materia de alzada y que fueran formuladas en la etapa de alegatos como se expondrá.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al pretensor le asiste derecho al pago de las sanciones moratorias previstas en el artículo 65 del estatuto sustantivo del trabajo y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual se ponderará la conducta asumida por el empleador para determinar si se ubica en los terrenos de la buena fe, de cara a las disposiciones legales y jurisprudenciales que reglan la materia.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que, como resultado del ejercicio ponderativo de las probanzas allegadas con la demanda, y de los demás medios de convicción acopiados y practicados en sede judicial, la conducta asumida por la sociedad empleadora se intima desprovista de buena fe, abriéndose paso la indemnización y sanción moratorias previstas en los artículos 65 del estatuto del trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos en primera instancia: que entre la señora HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS y la compañía ASFALTOS & HORMIGÓN, existió una relación de trabajo vigente entre el 07 de enero de 2014 y el 29 de marzo de 2019, y que el nexo contractual culminó por decisión unilateral del dador de empleo.

Aquí es importante precisar, que la accionada dejó libre de cuestionamientos la valoración de los medios de convicción y aun la conclusión a la que arribó el juez de instancia cuando condenó al pago de las acreencias laborales que encontró insolutas, por lo que el ejercicio ponderativo en este tópico no será re-examinado por la Sala.

2.4. De la indemnización moratoria por la mora en el pago de las prestaciones sociales y la sanción moratoria por no consignación de las cesantías a un fondo.

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una protección especial, del que es titular toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no sólo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y la calidad de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 65 del CST, el empleador que se sustrae de pagar al trabajador los salarios o prestaciones sociales adeudados al momento de la terminación del contrato, le concierne el reconocimiento y pago de una indemnización en proporción de: (i) un día de salario, por cada día de retardo, para quienes devengaron hasta un salario mínimo legal mensual vigente; (ii) un día de salario, por cada día de retardo, por los primeros 24 meses, y el reconocimiento de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la [Superintendencia Bancaria¹], a partir del mes 25, para quienes devengaron más de un salario mínimo legal mensual vigente, y reclamaron ante la jurisdicción ordinaria dentro de los 24 meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo; o (iii) al reconocimiento de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, liquidados desde la fecha en que inició la mora, y hasta la fecha del pago efectivo, para quienes devengaron más de un salario mínimo legal mensual vigente, y reclamaron ante la jurisdicción ordinaria después de haber transcurrido 24 meses desde el fenecimiento del contrato de trabajo (CJS SL del 25-07-2012, radicado 46385, SL-16280 del 26-11-2014, radicado 45523, SL-3274 del 01-08-2018, radicado 70066; SL-1005 del 17-03-2021, radicado 80991).

De manera similar, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establece que “[e]l valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija”. Ello así, el empleador que incumpla el plazo señalado estará obligado a pagar a su trabajador, a título de sanción, un día de salario por cada día de retardo. En tales circunstancias, asoma una situación que no se puede dejar de lado, esto es, que “[d]e considerarse procedente, se contabiliza hasta cuando se efectúe la consignación de cesantías de los períodos adeudados al fondo al que se encuentre afiliado o seleccione el trabajador o, en su defecto, hasta la fecha de la finalización

¹ Hoy Superintendencia Financiera de Colombia – Superfinanciera. Decreto 4327 de 2005

del vínculo laboral, toda vez que a partir de este momento surge la obligación a cargo del empleador de pagar las cesantías definitivas y empieza a correr la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No es admisible la concurrencia simultánea de una y otra indemnización”.

Ahora bien, el reconocimiento de las indemnizaciones a que aluden los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, no operan de forma automática, porque gozan de una naturaleza eminentemente sancionatoria, y como tal, su imposición está condicionada al examen, análisis, o apreciación de los elementos subjetivos que guiaron la conducta del empleador. Lo anterior significa, tal y como de tiempo atrás lo ha sostenido nuestro máximo órgano jurisdiccional de cierre que, para la aplicación de estas sanciones, el sentenciador debe analizar en cada caso, si la conducta remisa del empleador estuvo justificada con argumentos o razones que, pese a no resultar de recibo o con suficiente asidero jurídico, sí puedan considerarse atendibles y justificables.

De esta manera, fluye con claridad que, la buena fe que se predica del empleador incumplido, y que le permite sustraerse de la obligación de reconocer estas sanciones moratorias, no es la ausencia de un ánimo dañoso o fraudulento, o el haber cumplido con algunas obligaciones patronales, o durante un periodo parcial de la relación de trabajo, sino que corresponde a la demostración, bajo consideraciones atendibles y justificables, de haber estado bajo el convencimiento de que nada adeudaba al trabajador demandante (ver las sentencias CSJ SL-38973 del 10-05-2011, SL-2958 del 25-02-2015, Radicado 45552; SL-1682 del 08-05-2019, Radicado 40221; SL-959 del 18-03-2020, Radicado 75948; SL-1007 del 08-03-2021, Radicado 83679, SL-2362 del 03-10-2023, Radicado 95914).

Ab initio, debe decirse que a la demandante a la terminación del vínculo laboral se le pagó el valor de \$ 3.843.244 por concepto de su liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales (pág.26, doc.02, carp.01; págs.23 a 24, doc.02, carp.01; págs.247 a 29, doc.08, carp.01), tal y como lo encontró acreditado el juez unipersonal de primer grado y no fue discutido por la pasiva en el recurso de alzada, de modo que, lo que se discute no es la mala fe en su falta de pago, sino por su reconocimiento deficitario.

En sentir de esta Sala, y según lo probado en el presente proceso, no se vislumbra del acervo probatorio acopiado al proceso elemento de convicción alguno del que pueda inferirse que la encausada obrara guiado por la buena fe. Nótese que la única razón que esgrimió o planteó la sociedad ASFALTOS & HORMIGÓN para justificar el pago incompleto de las acreencias laborales a las que tiene derecho la deprecante, recae en la firme creencia de haber pagado en su totalidad lo debido.

Sobre este ítem vale resaltar por la Sala que, como en innumerables oportunidades lo ha dicho la Alta Corporación, en tratándose de la ponderación de la conducta del deudor en controversias de esta estirpe que “...los motivos que señale la obligada para exculparse deben ser atendibles y tener un fundamento razonable, **pues no basta «la simple manifestación de la entidad convocada a juicio de creer estar actuando conforme a derecho»** (CSJ SL3564-2021), sino que, el funcionario judicial debe apreciar el acervo probatorio para establecer la existencia de otros fundamentos que exoneren de imponer la sanción por mora (CSJ SL1903-2021)²”.

Por lo visto, resulta un argumento peregrino e infortunado el expuesto por el empresario accionado, al exponer de manera pura y simple que no tuvo la intención de burlar los intereses de su ex-trabajadora, cuando no aportó oportunamente al diligenciamiento judicial el soporte acreditativo que diera cuenta del pago completo de las prestaciones sociales reclamadas por la actora o bien las razones que permitieran inferir que la conducta omisiva estuvo ceñida estrictamente a los postulados de la buena fe.

Adicionalmente y con mayor incidencia en la desestimación de la censura, exalta la Sala que la accionada no puso en conocimiento de la actora las dificultades económicas que le impedía efectuar el pago oportuno y completo de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, sino que, por el contrario, mostró un profundo desinterés en atender las reclamaciones formuladas por la señora HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS, al punto que, no compareció a la diligencia de conciliación convocada por esta ante la Inspección del Trabajo de la Dirección Territorial de Antioquia (págs.27 a 30, doc.02, carp.01).

En tal dirección, de impartirse absolucón por la indemnización moratoria según la tesis propuesta por el impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal los diáfanos mandatos que dimanen del tenor del artículo 65 del estatuto del trabajo y vertidos en la doctrina desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo anterior, no deviene en equivocada la inferencia del juez singular, en el sentido de que, en el caso bajo análisis no hay elementos de convicción que indiquen que el dador de empleo actuó bajo razones atendibles que justificaran sin más, el pago incompleto de las obligaciones laborales derivadas del vínculo laboral que mantuvo con la señora RUÍZ GRANADOS.

² Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia sentencias CSJ SL2377 de 2023.

De otra parte, la Sala se releva de atender y resolver los cuestionamientos y peticiones adicionales a las que se hace mención en los alegatos de la parte demandada, como lo son, la valoración de los medios de prueba arrimados y su traslado a la contraparte, toda vez que tales supuestos no se encuentran suficientemente sustentados en el recurso de alzada interpuesto, el que valga de decir, se orientó a demostrar que la conducta de la sociedad accionada se ubicó en los terrenos de la buena fe, de ahí que por expresa prohibición legal, el juez plural no esté llamado a adoptar decisiones *extra y ultra petita*, así como tampoco estudiar hechos nuevos que desborden la materia del recurso de apelación. (CSJ SL 2266 del 22-06-2022, rad 85265 y SL5207 del 17-11-2021, rad 77421).

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fáctica, jurídicas y probatorias explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto condenó a la sociedad ASFALTOS & HORMIGÓN S.A. a reconocer a favor de la promotora de la litis las indemnizaciones moratorias previstas en los artículos 65 y 99 del estatuto del trabajo y de la Ley 50 de 1990, respectivamente.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que el recurso formulado por ASFALTOS & HORMIGÓN S.A. no alcanzó prosperidad, a su cargo se impondrán las costas, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. De conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de uno (1) SMMLV, vale decir, \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de noviembre de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por HILDA ADIELA RUÍZ GRANADOS, en contra de la sociedad ASFALTOS & HORMIGÓN S.A., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de ASFALTOS & HORMIGÓN S.A., fíjense como agencias en derecho de segunda instancia en la suma un (1) SMMLV, vale decir, \$ 1.160.000.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, prohijando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario